**Resistentes como la lluvia**

Los pueblos indígenas de Guatemala opositores a las represas Oxec y Renace, en cuya construcción participó el grupo Cobra, filial de ACS, continúan con sus luchas a pesar de las amenazas y los encarcelamientos.

> TEXTO Y FOTOS: Mª ÁNGELES FERNÁNDEZ Y J. MARCOS

La casa de José Bo Mo está en el camino. En una de las decenas de pistas que desde el pueblo guatemalteco de Santa María de Cahabón llevan a las más de 200 comunidades y casas desperdigadas que componen este municipio, a cuyo núcleo también se llega por una carretera de tierra que alarga las distancias con el doloroso traqueteo de los baches.

Fuera llueve con fuerza y la puerta está abierta. Hay dos hamacas. Sacos de harina para la venta, un par de estanterías de madera y tres ventanas que dan a la inmensidad de las montañas de la región de Alta Verapaz. La sala, con un pequeño altar religioso, hace de almacén, de espacio de reuniones y de comedor; también de dormitorio. La cocina queda fuera, casi a la intemperie, como las letrinas y las demás partes de esta construcción de madera y uralita levantada a pedazos. La vivienda ha sido atacada dos veces.

“No nos avisaron de la construcción de la hidroeléctrica y los dueños legítimos de la tierra no la queremos”. José Bo habla sin tapujos de la resistencia a la represa Oxec, en operación desde 2015, y, por extensión, a Oxec II, que funciona desde 2018 sobre las aguas del río del mismo nombre, en la cuenca del Cahabón. Habla sin tapujos, pero prefiere no mostrar su rostro ante de la cámara. Está amenazado y opta por un nombre falso. “Nos dijeron que era un proyecto de siembra, pero empezaron a talar árboles y a canalizar el agua”, cuenta rodeado de parte de su familia. Con un castellano que le cuesta pronunciar, su cuñada comparte que lleva ocho años sin bajar al río, que el agua está sucia y que ya no hay quebradas.

El relato de la empresa es muy diferente: no ha contestado a las preguntas de este medio y en su escueta página web mantiene una sección dedicada a lo que llaman proceso de consulta. Asegura que Oxec y Oxec II fueron los primeros proyectos en Guatemala que cumplieron con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas. Según su versión, participaron once de las comunidades de Santa María de Cahabón. Los matices surgen cuando se habla con las poblaciones q’eqchi’ originarias de esta zona del país. “Dispararon mi casa en 2014 y 2015 porque dije que falsificaron mi firma en el convenio”, narra Bo Mo.

En 2012, algunos vecinos y vecinas de esas once comunidades, las que se presuponían las únicas afectadas, firmaron un convenio con la empresa a cambio de proyectos económicos. Nadie de la comunidad podía “entorpecer el desarrollo del proyecto de hidroeléctrica Oxec”, informó Plaza Pública. El portal electrónico de la compañía omite que las obras estuvieron paradas porque la Corte Suprema de Justicia resolvió que no había habido una consulta adecuada, respondiendo así a un amparo interpuesto por Bernardo Caal Xoc, uno de los líderes de la resistencia.

Los trabajos se reanudaron cuatro meses después, a cambio de hacer una consulta a esas once comunidades. La sentencia de la Corte Suprema obvia que la OIT establece que el referéndum debe ser previo, libre e informado. Y la resistencia también insiste en que se debe preguntar a todas las comunidades, premisa bajo la cual el grupo crítico organizó una consulta de buena fe, en la que participaron más 26.500 personas. Arrasó la negativa. De forma paralela, el Ministerio de Energía y Minas inició un proceso de diálogo que finalizó con lo que califica de “histórico acuerdo” con once comunidades.

CRIMINALIZAR LA LUCHA

José Bo denuncia sobornos, habla de los puestos de trabajo que le ofrecieron para apaciguar la lucha, de las llamadas recibidas. Le intentaron secuestrar y matar, sostiene. No esconde su miedo, ni su diabetes, de la que está mejorando y que achaca a todo lo sufrido. Son los peajes de la resistencia a las hidroeléctricas en Guatemala, que no paran de crecer: ya está prevista Oxec III. “De momento no ha logrado avanzar, el estudio que presentaron es vergonzoso. Estamos ahora en un litigio de tierras. Serían nueve proyectos sobre el río Cahabón, lo cual es irracional, porque son 189 kilómetros de recorrido. El río está en agonía por la desaparición de los ecosistemas”, cuenta Julio González, del colectivo Madre Selva.

El precio que ha pagado Bernardo Caal Xoc han sido más de cuatro años en prisión. Amnistía Internacional ha denunciado irregularidades, negligencia y falta de pruebas en el caso contra el maestro indígena y lo ha declarado preso de conciencia. “No podemos dejar la lucha porque hay mucha demanda y somos muy pocas personas las que ponemos la cara por la criminalización que existe”, arranca en un coqueto restaurante de Cobán, la capital del departamento, muy cerca de la cárcel en la que estuvo preso. Poner la cara, asegura, supuso que “se inventaran un delito”.

Su denuncia pública no solo se quedó en las hidroeléctricas Oxec (propiedad de Energy Resources Capital Corp, y construida por la empresa israelí Solel Boneh), sino que alcanzó al complejo Renace, también sobre el río Cahabón y compuesto por cinco represas, “sobre las que no se hizo ninguna consulta libre, previa e informada, como exige la ley”, matiza González. Promovido por Corporación Multi Inversiones, de una de las familias más ricas de Guatemala, en la construcción participó el grupo Cobra, filial de ACS, propiedad del empresario Florentino Pérez.

Caal critica la presencia del también presidente del Real Madrid en Guatemala. Desde la cárcel, el líder escribió cartas en las que denunciaba que Pérez pone “en peligro la vida de miles de familias del pueblo maya q’eqchi’ en Guatemala”; habla de impunidad, de corrupción y de los 50 kilómetros desviados del río Cahabón.

ACS vendió el pasado 31 de diciembre la mayor parte de Cobra a la francesa Vinci. Ni Cobra ni ACS han respondido a este medio. Vinci subraya que Renace es previa a su adquisición, por lo que no valoran lo sucedido hasta ese entonces, si bien consideran que sus proyectos respetan su política de provocar el menor impacto ambiental posible. También en el mayor proyecto hidroeléctrico del país, los pueblos q’eqchi’ denuncian la ausencia de una consulta previa libre e informada, además de la división que ha generado en las comunidades y de los impactos ambientales, como la desaparición de gran parte del caudal durante meses. El Punto Nacional de Contacto, un órgano colegiado de deliberación sobre las líneas directrices de la OCDE y que depende del Gobierno español, apunta a que “se aprecian cambios significativos en algunos tramos del río Cahabón, que ponen de manifiesto efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales”.

EN MANOS EXTRANJERAS

El departamento de Alta Verapaz es un rompecabezas de montes, de colores verdes y árboles frondosos; también una superposición de caminos de tierra, unos estrechos, otros vertiginosos, todos agotadores, siempre agitados por un ir y venir de gente, de tuc-tucs, de motos y de camionetas con urgencia pese a los baches. Perros y gallinas se cruzan entre las casas espolvoreadas por las veredas. Alta Verapaz, zona maya q’eqchi’, la lengua mayoritaria de la región, está sembrada de hidroeléctricas, pero es de las áreas con menor cobertura eléctrica de Guatemala, también una de las más empobrecidas.

El guía espiritual de la resistencia, Mario Chococ, aprendió de su abuelo, que luchó contra los terratenientes para que le pagaran un salario justo. En sus rituales, pide permiso a los sagrados cerros para las acciones. Las hidroeléctricas han destruido tres lugares sagrados para el pueblo: Pata de Jaguar, el cerro Candelaria y El Calvario. “Y eso no tiene reparación”, lamenta Bo Mo.

Escenario de fuertes represiones durante la guerra civil, Alta Verapaz es tierra de pueblos originarios. En manos de grandes empresarios extranjeros, sobre todo españoles y alemanes, hace un par de generaciones la población indígena logró recuperar parte del territorio. Hoy el departamento continúa dividido entre grandes latifundios dedicados a monocultivos y pequeñas propiedades de subsistencia en las que se planta café, cardamomo, maíz y frijol. Las grandes represas continúan operando en un clima de resistencia menguado por el paso del tiempo. “Estoy preocupada porque no logramos sacar a las hidroeléctricas”, lamenta Catarina Chun, de la comunidad de Saqtá, a la que se tarda alrededor de hora y media en todoterreno desde la cabecera municipal, Cahabón. “Las quebradas se secan y eso afecta a la siembra. Además, ya no podemos salir solas porque estamos amenazadas”, añade.

Varias vecinas de Saqtá se han reunido en casa de Zoila Pop para compartir la situación en la que malviven. En el trayecto por los bacheados caminos de tierra hay quienes ya no se saludan; la desconfianza tiñe de ocre el ambiente. “Es nuestra tierra y entraron a la fuerza”, dice Olivia Reyes, cuya hija, Gabriela, participa en la reunión y pone a su madre como ejemplo. “Nos preocupan nuestros hijos y los que vienen en camino, no sabemos cómo van a vivir, por eso luchamos”, expone Zoila Pop.

ECOS DE OTRAS REGIONES

La pandemia rebajó la temperatura de una resistencia afectada ya por el encarcelamiento de Bernardo Caal, pero las ascuas nunca se apagaron. Su her- Parte de la resistencia de la comunidad de Saqtá. mana pequeña, María Caal, se ha convertido de manera natural en una lideresa. “El Estado de Guatemala es el responsable de toda la situación que tenemos que enfrentar como pueblos originarios. Nos vemos en la obligación de seguir en pie y demostrar que podemos alzar nuestra voz frente a las injusticias y los delitos que han cometido en nuestro territorio”, comparte ataviada con el corte, el traje tradicional de las mujeres de la zona. Habla en Salac, una comunidad a más de dos horas en coche de Cahabón y a la que se llega tras cruzar las instalaciones de Oxec.

Los relatos entre estas montañas son los ecos de lo escuchado en otras comunidades: mentiras, amenazas, chantajes… y un río que ya no pertenece a la gente que vive ahí. Sebastian Tiul Chub llega al encuentro después de una jornada de trabajo en el campo. Trae un cuaderno viejo donde tiene anotado todo lo sucedido desde el año 2012. “Vinieron con un convenio para hacer proyectos en nuestra comunidad. Darían 300.000 quetzales [unos 40.000 euros] al final de cada año, pero no hay nada, se lo reparten entre quienes trabajan allá”, cuenta en un castellano trabado.

Alberto Mas narra la división que se ha colado en los consejos comunitarios y también en las prácticas religiosas. “Ya no podemos acceder al río. Hay muchos compromisos de la hidroeléctrica, pero no hacen nada. No hay ni luz, pero sí tenemos los cables que pasan por aquí. La gente ya ha visto que no hay ningún beneficio”, añade Bernardo Ico Max, refugiado de la fuerte lluvia, que arrecia a ratos y amaina en ocasiones, pero siempre está ahí, como la resistencia. ◼